

El 2010: un buen año para la exportación de materias primas, pero no para Bolivia

Legamos al fin del 2010 con un hecho sorprendente; el gobierno liberalizó el mercado interno de combustibles, elevando entre otros el precio del diesel, que subió en 83%. La justificación oficial fue que el contrabando es culpable del incremento de la demanda interna, y el fin de la subvención evitaría que el país se desangre cada año, entre 380 y 150 millones de dólares, según quien sea el portavoz gubernamental.

Lo que llevó a esta medida, que fue suspendida por la presión popular, es que el país no se autoabastece de combustibles y por eso se importan; siendo así, lo lógico desde el punto de vista más inmediato, habría sido que la plata que se destinaba a la subvención y que ahora, según el gobierno, se quedaría en el país, se destinara a YPF para producirlos, pero de esto, ni hablar. Entonces ¿quién producirá estos combustibles? Serían las transnacionales, porque el gobierno se ha resistido a que YPF sea una empresa productora, manteniéndola sistemáticamente en el papel regulador que heredó del gonismo. Por eso entre las medidas preparatorias del decreto el gobierno ofreció días antes nuevos acuerdos a las transnacionales. Estas además se beneficiarían de un fondo para incentivar la exploración; es decir un subsidio más, que se suma, entre otras cosas, al que ya recibían los pozos pequeños. Este tema sin embargo, lo tocaremos en el próximo número de Petropress, debido al cierre de la presente edición.

El 1° de enero de 2006 la De Goyler and MacNaughton (D&M) indicaba que las reservas probadas de gas alcanzaban a 12,8 TCF, pero las del año anterior habían llegado a 26,75 TCF; ¡habían desaparecido 13,95 TCF! Luego, lo que pasó entre la empresa y el gobierno quedó en la oscuridad; no se aclaró a la sociedad la diferencia ni el error, si lo hubo, o si se exigió a la empresa una rectificación. La empresa se fue o la echaron.

Ahora se ha realizado una nueva certificación. El resultado (9,7 TCF) es algo menor que el obtenido por la D&M. La explicación oficial es que las

cifras del 2005 eran infladas; ¿o sea, que las cifras de la DM eran correctas?.

Sea cual fuere la verdad, es innegable –y un escándalo– que los últimos 5 años se ha dirigido el sector sin una política de reservas, sin cuantificación ni certificación. Y en estas condiciones, es decir, sin una base seria, año tras año, se publicitaron numerosas y millonarias promesas de industrializar y exportar.

De una manera general la consecuencia de la política del gobierno es que YPF depende de la producción de hidrocarburos de las transnacionales y que no tiene ni la capacidad de fiscalizarlas. Con esta dependencia es natural que el país no pueda elaborar una política hidrocarburífera independiente y nacionalista.

Por otra parte, la minería atraviesa un buen momento. El gobierno anunció en un informe público en Oruro las cifras provisionales de 2500 millones por exportaciones y 180 por regalías e impuestos. Pero, veamos bien: Bolivia se desprende de un valor de 2500 millones y se queda con 180. ¿Dónde está lo bueno de este negocio?. ¿Existe en este mundo algún empresario que se desprendería de 2500 millones para quedarse con 180? Naturalmente no. Aun sin salir del sector de producción de simples materias primas, ¿no existen en el país rubros que sin provocar los daños ambientales y sociales de la minería, podrían generar valores semejantes a esos 180 millones? El problema para ello es que los intereses transnacionales detrás de la minería son muy poderosos para permitirlo.

Bien, ¿para qué nos va a alcanzar esos 180 millones?. No serían suficientes ni para compensar por un año los perjuicios provocados a la población del río Pilcomayo y la cuenca del Poopó. Pero estos 2500 millones tendrán un buen impacto en el PIB. Y el Banco Mundial, el FMI, la CAF, BID, BNDES, etc., felicitarán al país por su buen desempeño económico. Esto es natural porque estas instituciones no representan a Bolivia sino a quienes se benefician de nuestras exportaciones ■

EN ENERO DE 2006 LA DE GOYLER AND MACNAUGHTON (D&M) INDICABA QUE LAS RESERVAS PROBADAS DE GAS ALCANZABAN A 12,8 TCF, PERO LAS DEL AÑO ANTERIOR HABÍAN LLEGADO A 26,75 TCF; ¡HABÍAN DESAPARECIDO 13,95 TCF! LUEGO, LO QUE PASÓ ENTRE LA EMPRESA Y EL GOBIERNO QUEDÓ EN LA OSCURIDAD; NO SE ACLARÓ A LA SOCIEDAD LA DIFERENCIA NI EL ERROR, SI LO HUBO, O SI SE EXIGIÓ A LA EMPRESA UNA RECTIFICACIÓN. LA EMPRESA SE FUE O LA ECHARON.